



Asamblea General

Distr.
GENERAL

A/HRC/12/G/2
16 de septiembre de 2009

Original: ESPAÑOL

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS

12.º período de sesiones

Tema 3 de la agenda

**PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE TODOS LOS DERECHOS HUMANOS, CIVILES,
POLÍTICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, INCLUIDO EL
DERECHO AL DESARROLLO**

**Carta de fecha de 11 de agosto de 2009 dirigida a la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por la Misión Permanente
de la República de Cuba***

Excelencia:

Tengo el honor de dirigirme a Usted para denunciar la injusticia que una vez más ha cometido el Gobierno de los Estados Unidos de América contra la Sra. Adriana Pérez O' Connor, esposa de Gerardo Hernández Nordelo, preso injustamente en una cárcel norteamericana desde hace más de una década. Luego de 95 días de espera, las autoridades de la Sección de Intereses de los Estados Unidos en La Habana informaron oficialmente el pasado 15 de julio de 2009 de que la visa solicitada por la Sra. Pérez O' Connor para viajar a ese país había sido denegada nuevamente.

La Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y los Organismos Internacionales con sede en Suiza desea denunciar que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha denegado por décima vez la visa a Adriana Pérez, quien nunca ha podido visitar a su esposo desde que el 12 de septiembre de 1998 fuera arbitrariamente detenido e injustamente condenado a prisión en los Estados Unidos por delitos que no cometió.

* La presente carta se distribuye en todos los idiomas oficiales. El anexo se distribuye únicamente en el idioma en que se presentó.

La respuesta de las autoridades norteamericanas fue comunicada a la Sra. Pérez el mismo día en que cumplía 21 años de matrimonio, hecho que demuestra la total alevosía y crueldad del Departamento de Estado de los Estados Unidos, país que se autotitula paladín de la democracia universal, del respeto a las leyes y los derechos humanos.

El burdo argumento utilizado en esta ocasión es que la Sra. Pérez “constituye una amenaza a la estabilidad y seguridad nacional de los Estados Unidos”. Indigna corroborar que la actual Secretaria de Estado, Hillary Clinton, ha reiterado el mismo argumento que su antecesora Condoleezza Rice para denegar la visa a la Sra. Adriana Pérez O’ Connor.

Esta decisión de las autoridades norteamericanas viola la propia legislación de ese país y constituye una violación sistemática de sus obligaciones internacionales, incluidas las refrendadas en la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas; el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, y las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, entre otros.

La conducta del Gobierno de los Estados Unidos de América, además de ser una clara trasgresión a las normas internacionales universalmente reconocidas, constituye también una sistemática y flagrante violación de los derechos humanos y un acto de tortura contra Gerardo Hernández Nordelo y sus familiares, condenado injustamente a dos cadenas perpetuas más 15 años de prisión.

A lo irracional de la negativa de visa a la Sra. Pérez y la injusta condena del Sr. Hernández, se suma el hecho de que recientemente la Corte Suprema de Estados Unidos se ha negado a considerar el caso por lo que se cierran prácticamente las avenidas legales para su solución.

Tras un tortuoso y arbitrario proceso, el pasado 15 de junio, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos decidió ignorar el clamor universal sin precedentes para que revisara el caso de los Cinco luchadores antiterroristas cubanos. Los jueces prefirieron hacer lo que les solicitó la Administración Obama y sin prestarles atención alguna, desconocieron los sólidos argumentos presentados por la defensa y por una docena de documentos de apoyo suscritos por diez laureados con el Premio Nobel, órganos legislativos, centenares de parlamentarios, prestigiosas organizaciones de juristas de numerosos países, incluyendo los Estados Unidos, y personalidades defensoras de los derechos humanos, académicos, religiosos y otros que representan a millones de personas en todos los continentes.

De ese modo la Corte convalidó una interminable serie de violaciones al derecho y a los procedimientos legales y se hizo cómplice de la política de promoción y amparo al terrorismo que ha sido y es la sustancia de la enorme injusticia de la que son víctimas nuestros Cinco luchadores antiterroristas.

La Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y los Organismos Internacionales con sede en Suiza, desea recordar que durante medio siglo, sucesivos gobiernos de los Estados Unidos han organizado y alentado, o permitido, la realización de numerosas acciones terroristas contra Cuba, de la que también han sido víctimas ciudadanos de otros países, incluidos los estadounidenses. La conducta de la actual administración sigue garantizando la impunidad de aquellos terroristas que se pasean por las calles de Miami como Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, culpables de la destrucción en pleno vuelo de un avión civil y la muerte de 73 personas, mientras castiga cruelmente a quienes, sin hacer daño a nadie, entregaron la juventud para impedir las fechorías de esos y otros criminales.

La Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y los Organismos Internacionales con sede en Suiza, rechaza enérgicamente la negativa de visa a Adriana Pérez O'Connor y califica como un acto verdaderamente cruel el sufrimiento impuesto a Adriana Pérez y Gerardo Hernández. En ese sentido, demanda al Gobierno de Estados Unidos el otorgamiento inmediato de visa humanitaria a Adriana Pérez para que visite a su esposo.

Me complace remitirle adjunto el **“Llamamiento a los Parlamentos y Pueblos del Mundo”**, aprobado por la Asamblea Nacional de la República de Cuba.

Al respecto, tengo el honor de solicitar a Su Excelencia que tenga a bien publicar la presente carta, y su anexo, como documento oficial del Consejo de Derechos Humanos, en todos los idiomas oficiales, bajo el tema 3 de la agenda, titulado “Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo”.

Con el testimonio de mi más alta y distinguida consideración.

(firmado) Fidel ORTEGA
Encargado de Negocios a.i.
Misión Permanente de la República de Cuba

Anexo

LLAMAMIENTO A LOS PARLAMENTOS Y A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.

Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort y René González Schwerert cumplirán pronto 11 años de injusta prisión.

Tras un tortuoso y arbitrario proceso el pasado 15 de junio la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América decidió ignorar el clamor universal sin precedentes para que revisara el caso. Los jueces prefirieron hacer lo que les solicitó la Administración Obama y sin prestarles atención alguna, desconocieron los sólidos argumentos presentados por la defensa y por una docena de documentos de apoyo suscritos por diez laureados con el Premio Nobel, órganos legislativos, centenares de parlamentarios, organizaciones de juristas de numerosos países, incluyendo Estados Unidos, y personalidades defensoras de los derechos humanos, académicos, religiosos y otros que representan a millones de personas en todos los continentes.

De ese modo la Corte convalidó una interminable serie de violaciones al derecho y a los procedimientos legales y se hizo cómplice de la política de promoción y amparo al terrorismo que ha sido y es la sustancia de la enorme injusticia de la que son víctimas nuestros Cinco compatriotas. Es larga la lista de esas violaciones, cualquiera de ellas suficiente para decretar la inmediata libertad de los acusados.

Inmediatamente después de apresarlos, en la madrugada del sábado 12 de septiembre de 1998 la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) informó a representantes de la mafia terrorista y a los medios de comunicación de Miami, que desataron desde entonces una intensa campaña de odio y calumnias que no cesa, calificándolos falsamente como “espías” y conjurándose con el Gobierno para incluir el incidente del 24 de febrero de 1996 como parte de la acusación después que llevaban más de seis meses de encierro.

Desde el momento del arresto y durante 17 meses fueron sometidos a confinamiento solitario, en celdas de castigo, aislados del mundo exterior, en violación de las propias reglas carcelarias estadounidenses que limitan semejante trato a un máximo de 60 días y sólo a reos peligrosos por delitos graves cometidos dentro de la prisión. Este cruel procedimiento se ha practicado contra ellos, después, en varias ocasiones, sin justificación alguna, para impedirles su defensa. Así volvieron a encerrarlos en el ominoso “hueco” en junio de 2001, por varias semanas, mientras ellos debían prepararse para ejercer su única oportunidad de dirigirse al Tribunal al concluir el juicio; al infame doble encierro regresaron, en condiciones aun más duras, durante todo el mes de marzo de 2003, precisamente cuando se cerraba el plazo para someter sus recursos de apelación ante la Corte de Atlanta.

A lo largo de más de diez años, han encarado los mayores obstáculos, ellos y sus abogados defensores, para ejercer sus derechos. Se les impidió el acceso a gran parte de las evidencias que sustentaron las fraudulentas acusaciones formuladas en su contra rechazándose más de diez mociones presentadas por la defensa antes del inicio del juicio. Permanecen en cinco prisiones separadas, dispersas en lugares aislados de la geografía norteamericana, lo cual hace muy difícil la comunicación con sus abogados. Hay que agregar que varias veces, siempre en momentos decisivos del proceso, no recibieron o les fue demorada la correspondencia legal que requerían

para elaborar su apelación. Gerardo Hernández Nordelo nunca recibió los documentos relacionados con su petición al Tribunal Supremo que le fueron enviados por correo certificado a comienzos de este año. Esta clara e inexcusable violación a los derechos del prisionero y a los de su defensor se suma a las constantes trabas a la comunicación de Gerardo con el exterior que persisten pese a las numerosas protestas de Cuba ante las autoridades norteamericanas.

El desarrollo del falaz juicio fue, todo él, una farsa macabra. El Gobierno insistió en que se celebrase en Miami, donde, precisamente, al mismo tiempo, ocurría el escandaloso secuestro de Elián González, un niño de 6 años, para cuyo rescate Washington tuvo que enviar fuerzas especiales desde la capital pues todas las autoridades y agencias locales eran cómplices de los secuestradores. La fiscalía se negó incluso a trasladar el juicio a la vecina ciudad de Fort Lauderdale, a media hora de distancia.

El Gobierno mintió de modo flagrante cuando alegó que Miami era un sitio adecuado, entonces, en el medio hostil y amenazante creado por los secuestradores de Elián y sin embargo, algunos años después, en 2002, al comparecer sus funcionarios en un litigio civil, solicitó el cambio de sede aduciendo que nada, incluso algo de mucha menor significación y sólo relacionado indirectamente con Cuba, podía ser juzgado con ecuanimidad en Miami (Ramírez vs. Ashcroft, 01-4835 Civ-Huck, 25 de junio de 2002). La cuestión de la negativa al cambio de sede y el ambiente imperante allí condujo el 9 de agosto de 2005 al Panel de jueces de Atlanta, unánimemente, a declarar nulo todo el juicio y ordenar que se hiciera otro y en lugar diferente (Corte de Apelaciones del Onceno Circuito, N.º 01-17176, 03-11087). En una acción insólita y contraria a la norma y la práctica estadounidense, el Gobierno recurrió esta histórica decisión y forzó a la Corte de Apelaciones, en votación dividida, a revocarla.

En ese propio año, el 27 de mayo de 2005, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas concluyó por primera vez en un caso relativo a los Estados Unidos, que la privación de libertad de los Cinco es arbitraria y contraria a los convenios internacionales como resultado de las violaciones cometidas durante el proceso legal e instó al Gobierno estadounidense a tomar medidas de inmediato para solucionar tal arbitrariedad.

Después de obligar a la celebración del juicio en Miami el Gobierno dio otros pasos para asegurar las condenas más severas e injustas. En la selección del jurado manifestó un racismo evidente al lograr excluir a la mayoría de los potenciales jurados afroamericanos. La fiscalía permitió toda suerte de presiones y amenazas a los miembros del jurado quienes llegaron a ser perseguidos al interior del edificio, fueron acosados por las turbas y hostigados por periodistas pagados por el Gobierno y al servicio de los terroristas, al punto que, varias veces, expresaron temor y preocupación por su seguridad, lo que llevó a la juez a quejarse e implorar al Gobierno que hiciese algo para remediar la situación (transcripción oficial del juicio, páginas 111, 112, 14644-14646).

Las llamadas pruebas contra ellos, caprichosamente clasificadas como secretas, fueron dolosamente manipuladas para fabricar los cargos principales cuya falsedad sería reconocida más tarde por el propio Gobierno y por la Corte de Apelaciones. Altos oficiales militares que comparecieron como testigos o expertos y revisaron las supuestas evidencias afirmaron, todos, sin excepción, bajo juramento, que no habían encontrado nada que implicase la búsqueda de información secreta o que afectase la seguridad nacional de los Estados Unidos (Contralmirante retirado Eugene Carroll [Transcripción oficial del juicio, páginas 8196-8301], General de

División del Ejército, retirado, Edward Breed Atkeson [Ídem, páginas 11049-11199], General ex Comandante del Comando Sur Charles Elliot Wilhelm [Ídem, páginas 11491-11547], Teniente General retirado de la Fuerza Aérea, James R. Clapper [Ídem páginas 13089-1335]). La Corte de Apelaciones en pleno, por unanimidad, en septiembre de 2008 determinó que no había prueba alguna de que los acusados hubieran “acopiado o transmitido informaciones secretas” ni que hubiesen dañado la seguridad nacional de Estados Unidos y por ello declaró que las sentencias por el Cargo 2 (conspiración para cometer espionaje) eran erróneas, las anuló y dispuso un proceso de resentencia para Ramón y Antonio (Corte de Apelaciones del Onceno Circuito, N.º 01-17176, D.C Docket N.º 98-00721-CR-JAL, páginas 70-81). Sin embargo, en asombrosa discriminación, aunque reconoció que igual correspondía proceder con Gerardo, rehusó hacerlo aduciendo que ya sobre él pesa otra condena a perpetuidad.

En cuanto a Fernando González, por otros motivos, la Corte también declaró equivocada la pena impuesta, la declaró nula y ordenó que fuera sentenciado nuevamente (Ibidem, páginas 67 a 69). Hay que subrayar que estos “errores” no pueden atribuirse sólo al Tribunal que impuso exactamente las sentencias solicitadas por la Fiscalía.

No hay mayor prueba de prevaricación que la otra condena perpetua con la que se castiga a Gerardo Hernández Nordelo por el llamado Cargo 3 (conspiración para cometer asesinato).

El propio Gobierno en mayo de 2001 reconoció que “a la luz de las evidencias presentadas en el juicio” no podía probar el Cargo 3 pues suponía “un obstáculo insuperable para la fiscalía”, pidió modificarlo a última hora y recurrió para ello a la Corte de Apelaciones, en un paso que la Fiscalía reconoció carecía de precedentes (Petición de emergencia [*Emergency petition for writ of prohibition*], páginas 1 a 8 y 27 a 31). Habiendo sido denegada la petición se produjo lo más inverosímil. Sin hacer una sola pregunta, en pocos minutos, el jurado declaró culpable a Hernández, por un supuesto delito que él no cometió y que el propio Gobierno reconoció que no lo podía probar.

Esto es prueba indiscutible de que en Miami aquel llamado juicio no podía ser sino un grosero embuste. Amedrentados, presionados y amenazados, los jurados habían estado siete meses en una sala colmada por los mismos malhechores a quienes habían visto en los medios locales ejecutar el secuestro de un niño, desafiar al Gobierno y a las leyes y amagar con incendiar la ciudad y los escucharon exigir al Tribunal el peor castigo para Gerardo.

Pese a tales antecedentes la Fiscalía demandó y obtuvo la sentencia a prisión perpetua.

Los desmesurados términos de prisión impuestos a los Cinco contrastan elocuentemente con los aplicados en los últimos años a otras personas acusadas de practicar verdaderamente el espionaje, a veces a escala inusitada, e incluso a algunas vinculadas a acciones armadas violentas contra Estados Unidos. Ninguno fue condenado a perpetuidad, todos recibieron sentencias menores a las de nuestros compañeros, algunos ya las cumplieron y son libres, a otros, convictos de espionaje, la administración Obama les retiró la acusación y los puso en libertad.

Pero hay un aspecto aún más revelador del verdadero carácter de todo el proceso que demuestra que el propósito del Gobierno era proteger y amparar a los terroristas, evitar que sus siniestros planes pudieran ser descubiertos, convirtiéndose en encubridor y cómplice de sus futuras tropelías. Para lograrlo, además de la exagerada reclusión carcelaria, y reconociendo la

heroica misión de lucha contra el terrorismo que cumplían, a nuestros compañeros se les impuso una restricción adicional, para después de terminada la sanción, que los “incapacitase” para volver a intentar algo en perjuicio de los terroristas. Lo expresó la sentencia contra René González con estas palabras: “se le prohíbe al acusado asociarse con o visitar lugares específicos donde se sabe que están o frecuentan individuos o grupos tales como terroristas, miembros de organizaciones que propugnan la violencia o figuras del crimen organizado” (Transcripción de las Actas de Sentencia, diciembre 14 de 2001, páginas 45-46).

Tan importante era para las autoridades norteamericanas la “incapacitación” que igual prohibición impusieron a Antonio Guerrero sobre quien ya pesaba una cadena perpetua más diez años. En cuanto a los otros tres compañeros, nacidos en Cuba, al extinguir sus condenas serían expulsados inmediatamente del territorio norteamericano. Nada deben temer allá los terroristas. No tienen que ocultarse para anunciar sin tapujo, como ya lo hacen, nuevas acciones criminales.

Quienes tienen encerrados injustamente a Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René muestran una mezquindad imperdonable hacia sus familiares con engorrosos y frustrantes trámites de las visas necesarias para visitarlos, desconociendo así los derechos de los prisioneros y sus familiares. Particularmente indignante es la situación que afrontan Adriana Pérez y Olga Salanueva a quienes se les niega sistemáticamente la posibilidad de visitar a sus esposos. Las autoridades norteamericanas rehúsan hasta ahora permitirles las visitas haciendo oídos sordos a las reiteradas peticiones de organizaciones religiosas, defensoras de los derechos humanos, sindicalistas e intelectuales de todo el mundo.

El trato dado a Adriana es de una infamia difícil de concebir. Gerardo, debe cumplir dos cadenas perpetuas más 15 años, hace 11 años que no ve a su esposa y la Corte Suprema se negó a considerar su caso. El 15 de julio, exactamente a un mes de esa repudiable decisión y el día de su aniversario de bodas fue el escogido por el Departamento de Estado para comunicarle, por décima vez, su negativa de visa, alegando que Adriana “es una amenaza para la estabilidad y la seguridad nacional de los Estados Unidos”.

A la irracional condena impuesta a Gerardo se suma este abominable tormento, verdaderamente sádico, a dos jóvenes inocentes que debe ser condenado vigorosamente por toda la Humanidad.

Al negarse a revisar el caso la Corte Suprema cierra prácticamente las avenidas legales para su solución. Sólo quedan las próximas resentencias a Ramón, Antonio y Fernando ante la misma jueza de Miami. Hay que exigirle que los libere ya.

Entramos en una nueva fase en la que es mayor la responsabilidad de la Administración y específicamente la del Presidente Obama.

El Presidente tiene la facultad constitucional y la obligación moral de hacer justicia. Él puede y debe hacerlo. Para ello debe disponer que sean retirados los cargos esgrimidos contra nuestros compatriotas que ya fueron severamente cuestionados por la Corte de Apelaciones, y por su predecesor en la Casa Blanca. Tiene que hacerlo si intenta proyectar una imagen de cambio hacia América Latina y el mundo.

Los terroristas celebran jubilosos la conducta de la actual administración que sigue garantizando la impunidad de Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, culpables de la destrucción en pleno vuelo de un avión civil y la muerte de 73 personas, mientras castiga cruelmente a quienes, sin hacer daño a nadie, entregaron la juventud para impedir las fechorías de esos y otros criminales.

La Asamblea Nacional del Poder Popular reclama la urgente solidaridad de todos los órganos legislativos, de los parlamentarios y parlamentarias y de las organizaciones políticas y sociales y las personas de buena voluntad en todo el mundo y los llama a movilizarse para exigir la liberación inmediata de Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René. Las cubanas y los cubanos, por quienes ellos sacrificaron sus vidas, sabremos luchar sin descanso hasta hacerlos regresar, libres, a la Patria agradecida.

Ciudad de La Habana, 1.º de agosto de 2009
